

La construcción política de la paz en Colombia

Un desafío de la sociedad civil

Jorge Rojas Rodríguez

Colombianos votando por el Mandato ciudadano por la paz,
26 de octubre de 1997
Fuente: El Tiempo

Jorge Rojas es periodista egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y tiene estudios en ciencias sociales en la Universidad de Córdoba. Autor de diversos libros sobre desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en Colombia. Activista de los movimientos por la paz.

Colombia padece desde hace cuatro décadas una guerra irregular cuyas causas estructurales no resueltas prolongan un conflicto armado interno que no se gana en el campo militar pero que tampoco se ha resuelto mediante el diálogo político. Esta indefinición persiste en medio de una grave situación humanitaria y de derechos humanos, una peligrosa crisis social, un proceso de fragmentación y polarización de la sociedad y un escenario internacional que favorece el uso de la fuerza.

Pero más allá de la incapacidad demostrada por el Estado y la insurgencia para llegar a acuerdos y de su decisión de prolongar las hostilidades, es necesario indagar por el papel de la sociedad colombiana y sus iniciativas civiles de paz en las fallidas negociaciones. El estado y la insurgencia intentan atrapar e involucrar la sociedad en su lógica de guerra frente a la cual se necesitan respuestas políticas que reivindiquen la democracia, la diversidad y el pluralismo.

Los virajes de la situación nacional e internacional obligan a los movimientos sociales a replantear estrategias, metodologías y formas de comunicación en la perspectiva de transformar la dura realidad de la confrontación en una oportunidad para la construcción democrática de la paz. Es necesario, entonces, revisar el camino recorrido hasta hoy, los intentos de articulación, las alianzas y sus resultados, la interlocución internacional, la construcción de agenda común y acuerdos mínimos, la capacidad de incidencia, las rupturas y contradicciones internas.

Este ejercicio cobra plena vigencia en la coyuntura política de hoy. La elección del presidente Uribe se produjo luego de unos diálogos por la paz que adelantó, sin resultados, el gobierno del presidente Pastrana (1998-2002) con las guerrillas. Los procesos de paz perdieron la confianza de la sociedad porque no ofrecieron resultados frente a la profunda crisis social y económica, no lograron reducir la intensidad del conflicto, ni permitieron la participación democrática del país en su diseño, seguimiento y evaluación. El electorado prefirió respaldar un experimento basado en el escepticismo crítico frente a estos infructuosos esfuerzos, antes que intentar otros caminos para resolver la crisis. Uribe ha lanzado una ofensiva nacional e internacional contra las organizaciones no gubernamentales, las iniciativas de paz y los movimientos sociales bajo la acusación genérica de que son "politiqueros al servicio del terrorismo y traficantes de derechos humanos". Estos señalamientos restringen las garantías para la acción de los movimientos civiles y ponen en peligro la integridad física de sus líderes y activistas.

Esta lectura del papel de los movimientos sociales de paz se inscribe en los cambios del mapa político que surgen luego de las jornadas electorales de Octubre de 2003 que rompieron el concepto de unanimismo alrededor de la guerra y permitieron el triunfo de candidatos que insisten en la solución política del conflicto armado.

Experiencias de participación civil en la construcción de paz

En este contexto es válido señalar el importante acumulado de experiencias en acciones civiles por la paz, en la preservación del movimiento social aún en medio de la adversidad y en formas de presión e incidencia en la búsqueda de una solución política al conflicto armado.

En los años 70 y 80 la iniciativa tuvo el liderazgo de los movimientos sindicales y agrarios, y se centró en las luchas sociales de carácter reivindicativo. En los años 80 emergen con fuerza las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Tal vez el hecho más característico es la eliminación física del liderazgo campesino en la década de los 80 que continúa con la persecución sistemática de líderes sindicales y dirigentes de izquierda durante la "guerra sucia" librada por los grupos paramilitares. El resultado de esta forma de exclusión violenta ha sido el desmantelamiento de las organizaciones sociales y políticas, la dispersión o desaparición del liderazgo y la imposición de modelos hegemónicos de control de la población por vías antidemocráticas y de fuerza. Las iniciativas ciudadanas de paz al nivel nacional surgen al final de los años 90 para exigir la solución política del conflicto en medio de la guerra sucia contra el movimiento social.

La expresión más formidable por su contenido democrático y su proyección política fue el Mandato por la Paz. Previo a ello en 1996 se celebró el Mandato de los Niños por la Paz, en el cual 2.7 millones de niños en 300 municipios votaron 'el derecho a la vida' y 'el derecho a la paz' como los derechos más importantes de una lista de 12 derechos. El evento fue organizado por la Red de Iniciativas Ciudadanas contra la Guerra y por la Paz (REDEPAZ), UNICEF y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al año siguiente se celebró el Mandato Ciudadano por la Paz. Fue producto de una amplia concertación de sectores ciudadanos que involucró iniciativas de paz, empresarios, iglesias y movimientos sociales entusiasmados con la posibilidad de un nuevo proceso con motivo del cambio de gobierno. Fue coordinado por REDEPAZ y la Fundación País Libre, que surgió a partir de la organización de marchas en contra del secuestro por parte de las guerrillas. Aproximadamente 10 millones de personas depositaron el 'voto por la paz' el mismo día de las elecciones locales y departamentales del 26 Octubre 1997. El país cansado de la guerra optó desesperadamente por la paz y encontró una propuesta ciudadana que interpretó ese momento político. Los ciudadanos votaron a favor de una solución negociada del conflicto armado y por la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Tanta gente voto que no hubo suficientes papeletas y se tuvieron que improvisar usando panfletos de publicidad electoral que fueron aceptados como sustitutos para las papeletas oficiales.

Por otra parte, una convocatoria plural y diversa de sectores sociales se congregan desde 1997 en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, asumiendo otra forma de articulación y acción por la solución negociada del conflicto. La primera plenaria de la asamblea tuvo lugar en Julio 1998, atrayendo entre tres y cuatro mil participantes del más diverso espectro de sectores. Declaró que la paz es un proceso en el cual el principal protagonista debe ser la sociedad civil, e intentó promover negociaciones y definir una agenda de la sociedad civil para los acuerdos de paz. Sus plenarios se celebran cada dos años.

La instalación de la Mesa de Diálogo y Negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los anuncios de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a principios del gobierno de Pastrana magnificaron el entusiasmo civil por la paz. Durante tres años las iniciativas civiles de la paz promovieron el apoyo al proceso de paz, contribuyeron a la participación democrática de la sociedad (aún en contravía de un modelo excluyente de la Mesa de Negociación) y defendieron el diálogo con movilizaciones y pronunciamientos en los momentos más difíciles de las conversaciones.

Sin embargo, el respaldo casi incondicional a un proceso de paz en el que había diálogo pero no negociación, y que ocurría en medio del conflicto armado, no tuvo en cuenta una estrategia en caso de una ruptura y menospreció el cansancio de la mayoría de la población frente a la ausencia de resultados tangibles. El proceso respondió al clamor ciudadano por la paz, pero también fue el resultado de una acción política con objetivos electorales del entonces candidato presidencial Andrés Pastrana cuyo compromiso real por la paz no era claro ni representaba una voluntad cierta del Establecimiento para negociar. Las FARC aprovecharon la circunstancia para dialogar pero no para negociar y dejaron la sensación ante el país y el mundo que usaron la zona de distensión en el sur del país para fortalecerse militarmente.

Este estancamiento de los diálogos y la formulación del Plan Colombia, configuraron un nuevo escenario que obligaba a modificar la agenda y a adoptar otras formas y otros escenarios de convocatoria civil. Las ONG de derechos humanos (que cuestionaron desde sus inicios el Plan Colombia como un peligroso obstáculo a la Mesa de Diálogo), las iniciativas de paz y los movimientos sociales lograron en esta coyuntura congregarse en una coalición civil denominada Paz Colombia. Este fue un paso importante de las ONG de derechos humanos que trascendieron su trabajo alrededor de las consecuencias del conflicto y proyectaron una acción política para la transformación de sus causas, lo que se interpretó como un compromiso real por la paz. Su mayor logro fue la convocatoria de una Conferencia Internacional sobre paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario que congregó en San José de Costa Rica en Octubre del 2000 delegados de 32 gobiernos, un sector de la insurgencia y una amplia representación de sectores de la sociedad colombiana.

En esta misma dirección, y en medio de la ruptura de los diálogos entre el gobierno y las FARC (Febrero de 2003) y las elecciones presidenciales (Mayo de 2003), fue convocado el Congreso Nacional de Paz y País, tal vez el último y desesperado esfuerzo civil por restaurar el diálogo y el espacio de confluencia que intentó crear las capacidades sociales y políticas para contrarrestar al candidato que convocaba con éxito a la guerra total.

Dos experiencias hacen parte de un esfuerzo más reciente del movimiento civil por la paz en Colombia: las iniciativas de mujeres por la paz y la resistencia civil a la guerra desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Hay diversas alianzas y coaliciones de organizaciones de mujeres por la paz que intentan convocar desde un lenguaje nuevo al país, cansado de la guerra y escéptico frente a la paz, a persistir en la solución política del conflicto armado. Expresiones significativas de ello son la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz y la Red Nacional de Mujeres, quienes organizaron una amplia movilización de las mujeres contra la guerra el 25 de Julio del 2002, y diversas marchas a zonas azotadas por el conflicto en solidaridad con la población civil.

Los pueblos indígenas han logrado proyectar ante el país y el mundo sus lógicas de resistencia a la guerra, y la defensa de su territorio y su cultura. Ejemplos de ello han sido la declaratoria de neutralidad de los indígenas en Antioquia en 1997 y las múltiples expresiones de resistencia ante la guerrilla y los paramilitares en el Cauca

ocurridas en los últimos tres años. Todas estas expresiones se convierten en una manifestación de autonomía desde la sociedad civil con gran experiencia y tradición para incidir en eventuales escenarios de guerra o paz.

Tensiones y dificultades para construir movimiento de paz

Todas estas manifestaciones de acción civil coinciden en una agenda común: solución política y negociada del conflicto armado, plena vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, transformaciones sociales y políticas desde la equidad y la inclusión, cooperación internacional para la paz y participación democrática de la sociedad para refrendar eventuales acuerdos. Sin embargo, se registran tensiones y dificultades que disminuyen la capacidad de acción y participación, afectan la credibilidad y las posibilidades de incidencia.

Puede ser que la contradicción fundamental sea aquella entre quienes justifican y quienes rechazan la lucha armada de la insurgencia. También existen dificultades de comprensión, especialmente en temas como: la representatividad y la legitimidad de las organizaciones que integran las coaliciones civiles de paz; los cambios políticos que ocurren alrededor del conflicto armado; el papel de la comunidad internacional, sus lógicas de acción, sus contradicciones y diferencias; y el papel de los sectores sociales específicos y de las regiones (que producen manifestaciones de centralismo y exclusión). Finalmente, hay deficiencias de coordinación, como la ausencia de una política de alianzas con diversos sectores de la sociedad colombiana y la inexistencia de una estrategia de comunicación e información.

Lecciones de un fracaso

Es evidente que se requiere una lectura crítica del papel de la "sociedad civil" y su responsabilidad en el fracaso de los procesos desarrollados entre 1998 y 2002. Seis de las lecciones más importantes de las cuales aprender son:

- 1) El movimiento social por la paz no puede ser voluntarista, debe tener elementos más políticos para decidir sus acciones y no puede dejar únicamente en manos de las partes enfrentadas la suerte del proceso. Se requieren mecanismos para la participación política que vayan más allá de las protestas y reivindicación de los derechos laborales y que se conviertan en hechos y oportunidades de poder a nivel local, regional y nacional con la capacidad de reunir y efectuar un cambio real.
- 2) Un movimiento de paz debería alertar al país sobre los riesgos que implica un proceso que no es irreversible y preparar las condiciones para una respuesta estructural y no coyuntural frente a una eventual ruptura.
- 3) Un movimiento de paz no puede ser solo contestatario, debe construir propuestas hacia la mesa de negociaciones con capacidad de incidencia, debe ejercer formas de presión sobre los grupos armados y el gobierno, y definir alianzas estratégicas frente a la comunidad internacional.
- 4) Un movimiento civil por la paz tiene la obligación de generar una estrategia de comunicaciones que evite la manipulación de la información y construya opinión pública antes y durante un eventual proceso.
- 5) La mayor experiencia del fracaso del proceso es la necesidad de avanzar en la construcción democrática de la paz como un espacio de formación y acción incluyente y participativa que no depende de quienes deciden la guerra o la negociación y que puede proyectarse aún en los tiempos de confrontación armada.
- 6) No basta un mandato ciudadano por la paz en las urnas, se necesita construir poder local, regional y nacional para hacer real la participación política de la

sociedad. El liderazgo ciudadano por la paz debe ganar espacio de poder en alcaldías, gobernaciones, congreso y otros espacios de elección popular

La construcción de la paz: obligación ética, responsabilidad política

La sociedad colombiana no resiste una guerra interminable, y tendrá que continuar desarrollando su capacidad de demandar y prepararse para una paz democrática. Se necesita el apoyo a todas las formas de expresión, movilización y participación política de la sociedad tales como: las demostraciones públicas contra la guerra de un movimiento de mujeres con un inmenso capital ético y político; las acciones de resistencia de los pueblos indígenas que nos son imparciales ni son indiferentes pero que no comulgan con la violencia; las gobernaciones del sur del país que procuran equilibrar desde la democracia el poder autoritario central; los consejos comunitarios de las comunidades afro-colombianas que se resisten a la guerra; las iniciativas civiles por la paz y las organizaciones de derechos humanos que insisten en la solución política y negociada de este conflicto; el gran consenso de abstención activa frente al referendo. El mejor antídoto a la guerra es la democracia y este ejercicio es un derecho que nos asiste aún en los tiempos difíciles que vivimos.

Las circunstancias que ofrece el prolongado conflicto armado en Colombia asociado al escepticismo que rodean las acciones sociales por la paz reclaman hoy un cambio sustancial en los movimientos por la paz, los derechos humanos y la equidad social. Es un cambio que se funda en la sociedad comprometida con la paz y se realiza en la política. Es urgente y necesario pasar de la posibilidad de incidir en la solución del conflicto a la posibilidad de transformar las causas del conflicto desde la dirección del estado.

No se trata necesariamente de crear un partido político de la paz sino de hacer de la paz una estrategia política, de tal manera que la paz se convierta en el eje central de la articulación de movimientos políticos que asumen la responsabilidad de transformar el país en franca rebeldía frente a la guerra. La transformación de los movimientos de paz debe entenderse en la perspectiva de ofrecer la sociedad colombiana una propuesta política de construcción democrática de la paz.

Es posible un acuerdo político que establezca los compromisos reales por la paz entre sectores sociales de diferentes opiniones, tendencias e intereses, y a partir del concepto ético de la solución pacífica de los conflictos. Acciones políticas que comprometan a los sectores interesados en participar no sólo en la movilización por la paz sino en las formas democráticas de dirección del estado desde la visión estratégica de la paz. El movimiento se transforma y se cualifica en la medida en que decida su participación política.